

Compromiso con los servicios públicos

OLATZ GARAMENDI LANDA

Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno

La calidad no se pierde o se gana en función del número de protestas

En los últimos tiempos asistimos a un debate sin precedentes en relación a nuestros servicios públicos. La realidad es la que es, y el Gobierno vasco ni debe ni quiere esconderla. Los servicios públicos en Euskadi (correspondientes a Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) tienen un nivel de calidad alto, con una efectividad media propia de las sociedades más avanzadas, con márgenes de mejora en constante trabajo e investigación, y con buenos profesionales. En definitiva, con muchas personas, tanto profesionales técnicas como las personas con responsabilidad política-institucional directiva, que trabajan y se esfuerzan a diario para que las cosas funcionen bien.

Las personas que nos dedicamos al servicio público, como cargos políticos o como personal empleado público, somos conscientes de que la eficacia de lo que hacemos depende del esfuerzo compartido. También de las personas usuarias, así como de quienes integramos la ciudadanía vasca silente, que sufrimos cuando hay dificultades y que nos beneficiamos cuando somos bien atendidos. Y, por último, o quizás en principio, somos todas y todos quienes somos llamados a las urnas para elegir a quien como opción política con compromiso de trabajar por los intereses generales de la sociedad queremos que nos represente.

Y es en este contexto en el que nos encontramos. La pugna política tiene sus parámetros, su ansiedad y su momento, pero no debemos confundirnos para hacerla presente de manera desmedida, sin el rigor de los buenos y reposados análisis de todo lo que nos rodea, incluidos nuestros servicios públicos. Es nuestro compromiso, como responsables públicos, seguir rindiendo cuentas ante la ciudadanía y hacerlo de la manera más objetiva posible y con el propósito de la mejora continua.

Hacer una reflexión sería sobre nuestros servicios públicos nos obliga a no dejarnos llevar por la crítica fácil. La calidad no se



pierde o se gana en función del número de protestas, y menos por incrementarlas artificialmente. Tampoco la contienda política se gana o se pierde en función del número de protestas.

Frente a la acusación de precariedad en el empleo público, ya se sabe que la Administración vasca, la correspondiente al Gobierno vasco, ha acometido un enorme proceso de consolidación del empleo que producirá en breve una bajada exponencial de la temporalidad. En esta misma legislatura, la plantilla del personal público se ha incrementado en 5.800 nuevos puestos de trabajo, mejorando en los convenios las condiciones en cuanto a licencias y permisos, y alcanzando los niveles salariales máximos permitidos.

En todo caso, las administraciones vascas no se distinguen por ser rácanas en la retribución de los empleados públicos, cuyos sueldos están bien posicionados en el panorama comparado. Obviamente, no podemos trabajar en la recuperación social del poder adquisitivo y en contra de otras limitaciones al gasto público que impone el Estado español, con el que no estamos a fal-

ta de episodios de confrontación política que, entiende, hacen ahora injustos los reproches. Como tampoco es posible, por sentencia del Tribunal Constitucional, salirnos del marco estatal de incremento salarial anual.

Resulta, sin embargo, prácticamente de imposible respuesta una acusación genérica de pérdida de calidad de los servicios públicos. Agradecería, como responsable político-institucional y también como ciudadana, un poco más de rigor. No estaría de más que dichas acusaciones fueran comparadas con los entornos estatal y europeo.

La calidad del servicio público sanitario está en que el aseguramiento es público, universal e igual para toda la ciudadanía vasca, y en que la cartera pública de prestaciones de Osakidetza es integral y de una dimensión notable.

La calidad del servicio público educativo está, también, en su universalidad e igualdad con buenas ratios de acceso al conocimiento y a la formación.

Y, por último, los cuidados y los servicios sociales, en un entramado multinivel que involucra a todas las administraciones públicas vascas, lo último que necesitan es una diatriba exigente sobre calidad, ante la irrupción de las máximas cotas de dificultad por la inversión de la pirámide de edad, la natalidad bajo mínimos y la necesidad de dimensionar el dispositivo de recursos del que no debemos permitirnos marginar al sector privado.

El autogobierno es la herramienta que nos permite gestionarlos y mejorarlos desde Euskadi y para Euskadi, y continuaremos, por supuesto, en la labor de reforzamiento de nuestro sistema de autogobierno con el fin último de optimizar el rendimiento de nuestras políticas públicas centradas en las vascas y los vascos de toda condición. La calidad de los servicios públicos en Euskadi es un reto por el que merece mucho la pena luchar. Pero no nos equivoquemos en el diagnóstico, y mucho menos en las recetas.